

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado segundo de Distrito de México por Marcelino Domingo, á virtud de reputar violadas en su persona con el hecho de habersele juzgado y sentenciado por la autoridad militar, las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el C. José Villanueva en representación de Marcelino Domingo, promovió el presente juicio de amparo contra algunos procedimientos de la Comandancia Militar del Distrito, que había causado y estaba juzgando militarmente al expresado Marcelino Domingo por haber disparado su carabina Remington causando la muerte de un soldado y la herida de otro. El amparo se promovió el día 15 del último mes de Mayo, pidiéndose que desde luego se decretara la inmediata suspensión de todo procedimiento, y muy especialmente la ejecución de la sentencia de muerte pronunciada contra Marcelino Domingo; y habiéndose decretado de conformidad esta última solicitud, V. mandó que la Comandancia rindiera el informe con justificación que previene la ley de la materia, y después, que se me pasaran los autos en los cuales ví la necesidad de que se abriera el término de prueba para que pudiera darse una sentencia con entero conocimiento de causa; puesto que por el escrito en que se entabló al recurso de amparo, no se podía saber si positivamente existían aquellos procedimientos de la Comandancia Militar en los cuales se advertían las violaciones de las garantías personales otorgadas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución. Abierto el término de prueba, el representante del quejoso ha rendido todas las que

le parecieron conducentes; y de ellas resultó comprobado, que la Comandancia Militar, procedió á verificar el jurado de sentencia y determinar la ejecución de su fallo, después de haber tenido conocimiento de que Marcelino Domingo había sido amparado por la de la sentencia ejecutoriada en que se le otorgó el amparo. Esta sentencia declaró que se había violado en la persona de Marcelino Domingo la garantía individual concedida en el artículo quinto de la Constitución. Como el efecto de una sentencia de amparo es que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de las garantías individuales vulneradas (artículo 23. Ley de 20 de Enero de 1869), bajo estas consideraciones no ha debido verificarse el jurado de sentencia contra Marcelino Domingo, después de pronunciada y notificada á la autoridad responsable la sentencia definitiva.

Conforme á ella y al artículo 23 de la ley, quedó restituido en su calidad de ciudadano en el órden civil, el amparado Marcelino Domingo; de donde se deduce, que todos los procedimientos militares que se llevaron á efecto después de la sentencia de amparo, se dirigieron y consumaron contra un ciudadano, no sometido al fuero de guerra, cuyo fuero, según los preceptos constitucionales de México, es el común que reside en los jueces y tribunales ordinarios. De aquí se sigue, que el C. Marcelino Domingo ha sido juzgado y sentenciado por un tribunal especial, y conforme á una ley privativa: es incontestable, pues que es tribunal especial el de la Comandancia Militar, y ley privativa la Ordenanza Militar.

Siendo especial el tribunal que ha procedido á verificar el jurado de sentencia contra el repetido C. Marcelino Domingo, y privativa la ley que ha seguido en sus procedimientos, se ve que no ha podido aplicar y no ha aplicado en el juicio militar que ha instruido al quejoso, las leyes preexistentes al hecho ó hechos imputados al quejoso, entre los cuales se hallan todas

las que establecen el principio de que las causas y negocios de los ciudadanos han de juzgarse por los jueces ordinarios. Estos son los competentes en todos casos, á no ser que se encuentre que por una ley expresa se ha establecido un fuero especial, á que deban estar sujetos en determinados casos. Si pues los jueces competentes de Marcelino Domingo son los ordinarios, estos son los únicos que han tenido facultad para expedir el mandamiento escrito que fundara y motivara la causa legal del procedimiento para juzgarlo. Pero como no se ha hecho así, resulta: que con el procedimiento militar se han violado en la persona del quejoso, las garantías concedidas en la primera parte del artículo 13, en la segunda del artículo 14 y en la primera del artículo 16 de la Constitución federal.

La Comandancia presenta la ley de 15 de Setiembre de 1857 para justificar sus procedimientos, y para fundar su jurisdicción sobre Marcelino Domingo: creo que dicha ley es orgánica del artículo 13 de la Constitución, y que los hechos imputados al quejoso, son delitos absolutamente militares, y cuando menos están sujetos para su castigo á la jurisdicción militar. Después de un atento estudio, el Promotor se ve en el caso de alegar ante V. que son erróneos los conceptos de la Comandancia, porque evidentemente no es orgánica del artículo 13 de la Constitución, la ley de 15 de Setiembre de 1857, supuesto que no tiene los caracteres de toda ley orgánica constitucional, ni puede considerarse vigente, sino solo en el tiempo que duraron los efectos y vigencia de la ley de 17 de Enero de 1870, que evidentemente ha dejado de ser obligatoria antes de que se verificaran los hechos imputados á Marcelino Domingo; y por consiguiente, no pueden estos ser calificados de delitos militares, porque para que esta calificación fuera legal, debía haberse rendido la prueba correspondiente, ó exponerse los fundamentos absolutamente legales que para ello se tuvieran.

TOMO IV.—PARTE II.

Mas como nada se ha probado, ni dicho fundadamente sobre este punto, supuestas las pruebas rendidas por el quejoso, quedan en pie estas dos proposiciones:

Primera: La autoridad judicial militar, que es especial para aplicar una ley privativa, ha procedido contra un Ciudadano que por declaración expresa de la Justicia de la Union y por el precepto de la ley orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución, goza y ha gozado de todos los derechos del comun de todos los ciudadanos.

Segunda: Que el Ciudadano á cuyo favor se ha hecho aquella declaración, es Marcelino Domingo contra quien se han dirigido aquellos procedimientos de la Comandancia militar, que tuvo conocimiento oportuno de esa declaración, y sin embargo procedió, no obstante este conocimiento y contra lo prevenido en dicha declaración en el artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869; queriendo que subsistan sus procedimientos anteriores al tiempo en que tuvo conocimiento de dicha declaración, contra los efectos legales y términos expresos de ella misma.

En atención á lo expuesto y á las constancias de los autos, el que suscribe es de parecer, que el ya repetido C. Marcelino Domingo ha probado bien que en su persona se han violado las garantías que otorgan los artículos 13, parte primera, 14, parte segunda y 16 de la Constitución Federal, y que estas violaciones se han llevado á efecto por la Comandancia militar del Distrito.

En consecuencia, y con arreglo á los artículos primero y 126 de la misma Constitución, del artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, concluyo pidiendo á V. haga la declaración que ha pedido el quejoso, con arreglo á derecho.

México, Junio 18 de 1873.—*Moctezuma.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

México, Julio 7 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por Marcelino Domingo, en virtud de reputar violadas en su persona con el hecho de habérsele juzgado y sentenciado por la autoridad militar, las garantías que otorgan los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución; vista la suspensión del acto, dictada por el Juzgado; el informe rendido por la autoridad infractora en el caso; las pruebas y alegato del quejoso; lo pedido por el ministerio fiscal; visto, en fin, lo que verse debía; atendiendo á que la violación de garantías contra el quejoso, se hace consistir, en que habiéndose declarado por la Corte Suprema de Justicia y para los efectos que marca el artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, que Marcelino Domingo no ha pertenecido al ejército; al juzgársele por el delito de homicidio que cometió, siendo como era un simple ciudadano sin carácter alguno militar, no ha debido verificarse esto por leyes ni tribunal privativo, como son las que se le han aplicado y la autoridad militar que lo ha juzgado, y

Considerando; Primero: Que los artículos 13 y 14 que como violados se invocan, el uno previene «que nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y expresamente aplicadas á él,» y el otro, «que nadie puede ser juzgado por leyes privativas y tribunales especiales:» que en el caso y supuesta la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia por la que se declaró en juicio de amparo, que Marcelino Domingo no ha sido militar, es incontestable que al juzgar y sentenciar al quejoso la jurisdicción militar, por delito cometido como soldado del ejército y en acto del servicio, se ha verificado esto por tribunal especial y sin la exacta aplicación de la ley al hecho, pues aun suponiendo sin conceder, que el delito fuese de la competencia del tribunal militar, la culpabilidad del quejoso se declaró teniendo en conside-

ración y bajo el concepto de ser el reo soldado del ejército y hallándose en acto del servicio, lo que consta del veredicto del jurado. (fojas 72.)

Considerando; Segundo: Que la ley de 15 de Setiembre de 1857, en que se ha apoyado la autoridad militar para reputar de su competencia el caso y sostener que aun como paisano debió Marcelino Domingo ser juzgado y sentenciado en la forma que se efectuó, no puede decirse vigente ni calificarse como reglamentaria del artículo 13 Constitucional, pues ni fué expedida con tal carácter, ni el ejecutivo en la fecha de su promulgación tenía facultades para ello; á lo que hay que agregar, que su fecha, que es la de 15 de Setiembre, es anterior á la de 16 del propio mes y año en que por declaración del mismo Congreso constituyente se mandó comenzarse á regir; y teniendo por último presente, que verificándose violación de los artículos mencionados 13 y 14, según y por las razones legales que se han expresado, es consecuencia forzosa igual violación de la garantía que concede el 16 que también se invoca por el quejoso, puesto que faltaría la competencia que en él se consigna; por tales consideraciones, pues, y atento el pedimento fiscal, se declara: que la justicia de la Unión ampara y protege á Marcelino Domingo, por haberse violado en el caso y en su persona las garantías individuales que otorgan los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución, con el acto de haber sido juzgado y sentenciado por la autoridad militar.

Hágase saber, remítase copia de este fallo al Diario Oficial y Semanario Judicial, y previa citación fiscal, elévense los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. Lo decretó y firmó el ciudadano Juez segundo de Distrito, Lic. José María Canalejo.—Doy fé.—*José María Canalejo.*  
—*Fernando Zamora*, secretario.

Es copia. México, Julio 16 de 1873.—*Fernando Zamora*, secretario.

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Agosto 9 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de ésta Ciudad, por Marcelino Domingo, contra la comandancia militar de la misma Ciudad, por la orden que dio de que el quejoso fuera juzgado militarmente, porque estando en el Batallón num. 4 en ejercicio de instrucción, en cuyo ejercicio funcionaba Marcelino Domingo, el tiro que salió de la carabina que portaba causó la muerte del soldado José María López é hirió al cabo Francisco Canseco, y en virtud de cuya orden Marcelino Domingo fue juzgado por jurados de calificación y de sentencia, y condenado por éste á la pena capital, actos de que se queja, alegando: que vulneran en su persona las garantías á que se refieren los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución general; y Considerando: que el referido Marcelino Domingo ha sido amparado antes de hoy, contra el acto por el que se le consignó forzosamente á servir en el ejército; que este amparo importa la declaración de que el quejoso nunca ha debido ser tenido como militar, ni por lo mismo sujeto al fuero militar, y que de consiguiente, juzgarlo militarmente y aplicarle una pena de ordenanza por el hecho de que se trata y por jurados militares de calificación y de sentencia, privándolo de que lo juzgue la jurisdicción ordinaria, como corresponde, importa la violación de las garantías invocadas, tanto mas cuanto que el jurado de sentencia pronunció su veredicto después de que Marcelino Domingo fué amparado por ésta Corte Suprema: por lo expuesto y de conformidad con lo que previene el artículo 101 de la Constitución general, se decreta: 1º Se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 7 del mes próximo pasado por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad que declara: que la justicia de la Unión ampara y protege á Marcelino Domingo, por haberse violado, en el caso y en su per-

sona, las garantías individuales que otorgan los artículos 13 14 y 16 de la Constitución con el acto de haber sido juzgado y sentenciado por la autoridad militar. 2º consignese á Marcelino Domingo á la justicia ordinaria para lo que háya lugar. 3º: Devuelvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de ésta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos respecto del primer punto y por unanimidad respecto de los otros, los CC. presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—J. M. Lozano.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramírez.—Manuel de Castañeda y Nájera.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velasquez.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México Setiembre 27 de 1873.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovida ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Santiago Pérez y otros, contra la providencia del Cuerpo Municipal, que mandó rematar el abasto de carnes.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal está en la inteligencia de que el H. Ayuntamiento procedió de buena fé al poner en remate el abasto público de carnes, que lo hizo guiado por el deseo muy laudable de mejorar el servicio de ese ramo, bastante malo de mucho tiempo atrás, y por el de cumplir con uno de sus principales deberes, cual es el de procurar la abundancia y buena calidad de los